



HOY DIARIO DEL MAGDALENA / 4C

COLOMBIA - VENEZUELA

MIÉRCOLES, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015

BOGOTÁ, COLOMBIA

En momentos en que la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, adelanta una agenda diplomática por Ginebra y Nueva York para expresar el inconformismo de Colombia en el trato que se le ha dado a los connacionales expulsados de Venezuela, el vecino país continúa tomando medidas que agravan la situación.

Tras una reunión con su gabinete, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, anunció ayer tanto el cierre fronterizo entre Paragachón y Zulia, como el reforzamiento de la frontera con tres mil hombres más.

Además, le dijo al presidente Juan Manuel Santos frente a los requisitos que éste puso para sentarse a dialogar, que quien debe fijar condiciones es Venezuela, pues asegura que el gobierno colombiano ha sido el agresor, haciendo referencia al diálogo diplomático.

Sin embargo, en opinión de analistas, estas movidas de Maduro reflejan la preocupación de su Gobierno por el terreno que ya tiene abonado Colombia en organismos internacionales con denuncias sobre violaciones al derecho internacional humanitario.

Esto luego de que se conocieran las condiciones bajo las cuales se efectuaron las deportaciones colectivas a los connacionales, algunos en medio de presiones, maltratos, agresiones y violaciones por parte de la guardia del vecino país.

Si bien fue una derrota diplomática la negativa de la Organización de Estados Americanos (OEA) para convocar una reunión extraordinaria de cancilleres para abordar la situación humanitaria en la frontera, el revés del Gobierno colombiano ha alcanzado mayor eco en la comunidad internacional.

Para Marie-Eve Detoeuf, coordinadora del Área Relaciones Internacionales de la Universidad del Externado, es importante mantener la disposición al diálogo diplomático, como lo ha hecho Colombia, pero sin dejar a

¿DARÁ RESULTADO?

La ofensiva diplomática de Colombia contra Venezuela



ENTRE LAS EXOTICAS exigencias del narcorégimen de Nicolás Maduro está el control a los medios de comunicación, al contrabando y al paramilitarismo, así como a las tasas cambiarias y al modelo económico establecido.

un lado las denuncias en escenarios internacionales, que puedan ejercer presión sobre Venezuela.

"Aún si se diera la reunión entre los dos presidentes, no se puede dejar como está la situación humanitaria. El diálogo debe darse, pero con las disposiciones que se han propuesto", indicó la experta.

Cabe recordar que Santos aceptó un diálogo directo con Maduro, con tres condiciones

concretas: un corredor humanitario para permitir el paso de estudiantes en la frontera, recuperar enseres de los afectados y garantías para las deportaciones.

Aunque el corredor ya fue habilitado, la canciller Holguín salió al paso a un supuesto comunicado del Gobierno venezolano en donde sentaban unas condiciones para reabrir la frontera y solucionar la crisis.

Las condiciones de Maduro incluyen control a los medios de comunicación, al contrabando y al paramilitarismo, así como a las tasas cambiarias y al modelo económico establecido.

Por el contrario, Román David Ortiz, politólogo experto en temas de seguridad y relaciones internacionales, explica que una reunión entre los Presidentes no tiene sentido bajo las circunstancias actuales, donde el vecino país busca escalar el conflicto en la frontera.

"Maduro se siente acorralado, por lo que esa reunión no debe darse sino hasta que se cumplan unas condiciones mínimas, tanto las que planteó Santos, como unas que contemplan la reparación económica a colombianos deportados y desplazados de Venezuela", indicó Ortiz.

De acuerdo con el especialista, además debería ponerse en marcha una investigación independiente sobre violaciones a Derechos Humanos a los afectados y garantizar a los desplazados con doble ciudadanía, que si así lo desean puedan devolverse a Venezuela.



LA CANCELLER COLOMBIANA María Ángela Holguín inició un periplo por Europa y Estados Unidos denunciando las atrocidades del Gobierno de Nicolás Maduro contra los connacionales en la frontera.

"Maduro dice da la cara, que quiere reunirse con el presidente Santos, pero lo que hace es poner unas condiciones que hacen imposible esa reunión. Lo que está haciendo es provocar a Colombia", añadió.

Precisamente, los diálogos de Holguín con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Director General de la Organización Mundial para las

Migraciones (OIM), la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Secretario General de Naciones Unidas, servirá para denunciar los abusos del régimen venezolano y buscar promover sanciones al vecino país.



EL EXPRESIDENTE ANDRÉS PASTRANA, en particular, se refirió a la decisión de Maduro de ordenar el cierre, desde hoy, de la frontera en Paragachón, en La Guajira, lo que empezó a afectar a ese sector de la población colombiana de la región.

Dirigencia política duda de interés real de Maduro por reunión con Santos

BOGOTÁ, COLOMBIA

La dirigencia política colombiana expresó su preocupación este martes porque los mensajes que envía el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para superar la crisis en la frontera con Colombia no son suficientes pese a sus anuncios.

El expresidente de la República Andrés Pastrana Arango sostuvo que "hay unas contradicciones entre lo que dice el presidente Maduro privadamente -de que está dispuesto a reunirse con el presidente Juan Manuel Santos- y las medidas que toma que son las contrarias a lo que significa un gesto de buena voluntad en el arreglo de

las relaciones entre los dos países". Pastrana, en particular, se refirió a la decisión de Maduro de ordenar el cierre, desde hoy, de la frontera en Paragachón, en La Guajira, lo que empezó a afectar a ese sector de la población colombiana de la región.

A su turno, el senador de La U, Óscar Mauricio Lizcano, indicó que lo hecho nuevamente por el mandatario es una bofetada a los colombianos; "está demostrado que sus intenciones no son arreglar el problema sino por el contrario dilatarlo forzando la tesis de sus propósitos electorales", dijo.

De similar posición fue el senador Jimmy Chamorro Cruz,

quien dijo que "sus gestos -los de Maduro- de ahora hacen ver una hostilidad que se mantiene contra los colombianos, ahora en La Guajira".

Mientras tanto el Gobierno, en voz del ministro del Interior Juan Fernando Cristo, calificó de "irrespetuosas y ofensivas" las declaraciones de Maduro, por lo que estudiarán su posición al respecto.

"Francamente no entiendo uno la intervención del presidente Maduro de ayer porque eso no contribuye para nada a la creación de un clima que permita el diálogo bilateral. El presidente Santos ayer había aceptado la mediación de Uruguay, y reiteró la disposición al diálogo bilateral. Tendremos que evaluar esa declaración", dijo Cristo.

El Ministro también rechazó los señalamientos del vecino país, frente a los medios de comunicación en Colombia. Según Cristo el gobierno no compartirá las agresiones de Maduro y aseveró que en el país sí se respeta la libertad de prensa.

POR EL CIERRE DE LA FRONTERA

Cerca de 2.000 quejas ha recibido la defensoría

BOGOTÁ, COLOMBIA

En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, afirmó ya han recibido 2.000 quejas por parte de los colombianos deportados, dijo que ya se puso en marcha un plan adicional por el cierre de Paragachón y le pide a Venezuela que cumpla con la ley de su país sobre deportación.

Así como la ministra María Ángela Holguín, el Defensor del Pueblo le pidió al vecino país que se cumpla con lo que ordena la ley venezolana a la hora de deportar a los colombianos. "Lamentablemente nos hemos

encontrado con la ley 3794 que trae todo un procedimiento para poder deportar a un extranjero de Venezuela a otro país, en este caso a un colombiano, no se ha cumplido", dijo.

El defensor explicó que en la norma "se habla de una notificación, de una audiencia verbal, de nombrar a un abogado, de apelar las sanciones administrativas de expulsión y lamentablemente a los colombianos sin fórmula de juicio, sin aplicar las mismas leyes venezolanas se les está desconociendo los derechos humanos".

Otálora también hizo mención de la gira que está realizando la Canciller colombiana, en la que

hoy se encontrará con el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, y explicó que lo que se quiere "es que se genere un escenario con un organismo multilateral donde se puedan discutir todas esas denuncias que hemos venido planteando nosotros. (...) Esto no está encaminando a otro objetivo de permitir que de manera internacional se discuta esta problemática".

El Defensor reiteró que Venezuela está en todo su derecho de decretar más cierres de frontera y que mientras tanto, hay funcionarios de la Defensoría del Pueblo que se están trasladando a la zona, como parte de un plan adicional, para poder ayudar a los colombianos deportados y retornados.



EL DEFENSOR DEL PUEBLO, Jorge Armando Otálora reiteró que Venezuela está en todo su derecho de decretar más cierres de frontera y que mientras tanto, hay funcionarios de la Defensoría del Pueblo que se están trasladando a la zona, como parte de un plan adicional, para poder ayudar a los colombianos deportados y retornados.

adicional, para poder ayudar a los colombianos deportados y retornados.

LA TUTELA

Las declaraciones de Otálora se dieron en marco del primer

debate del proyecto con el cual se quiere agilizar el trámite de la tutela. Dentro de los aspectos que enuncia el proyecto se encuentra la posibilidad de acumular las tutelas para eliminar la "tutelatón", ordenar que cualquier petición o consulta por parte de los abogados se dé por escrito a los jueces y de ser necesario se convoque a las dos partes para ser más transparentes en el proceso; y que el juez tenga la posibilidad de implementar sanciones para quienes no cumplan con los fallos de la tutela.

"Hay una figura importante y es el tema del desato. No había término para que un juez se pronunciara sobre un fallo sobre el que él ya se había pronunciado y que no le obedecieron su sentencia (...). Aquí se les está dando una orden perentoria para que ese juez en diez días falle el desato e imponga las sanciones a la institución que corresponda por no haber cumplido con el fallo", explicó el Defensor.